México: La rebelión de las elites¹

Soledad Loeza*

LOS NUMEROSOS Y VARIADOS análisis del fin de los regímenes autoritarios atribuyen un rol central a las elites en ese proceso, independientemente de la manera como se haya producido el derrumbe: a partir de una violenta crisis económica, de una derrota militar o de una amplia movilización popular.² La participación de minorías poseedoras de recursos culturales, políticos o económicos escasos fue decisiva en el impulso, bloqueo o dirección del cambio,³

* Agradezco a los miembros del seminario de América Latina del Latin American Center de St. Antony's College, Oxford, sus valiosos comentarios a una primera versión de este ensayo.

¹ La evocación del título al ensayo clásico de José Ortega y Gasset, *La rebelión de las masas*, es obvia pero no casual. No obstante, aquí la noción de elites que se utiliza es más amplia pues no se refiere únicamente a las *minorías selectas* de las que hablaba Ortega, sino que incluye también a otros grupos de privilegio cuya posición se apoya en recursos políticos o económicos. Por otra parte, la hipótesis que aquí se desarrolla plantea que el futuro de la democracia mexicana no está amenazado por la ofensiva de las mayorías —que era la clave de la preocupación de Ortega—, sino por la reacción defensiva de los grupos de privilegio ante los cambios sociales y políticos que amenazan su posición; este reflejo antidemocrático es parte de su condición esencial de grupos minoritarios. En 1995 el historiador estadounidense Christopher Lasch publicó un ensayo acerca de la sociedad norteamericana contemporánea cuyo título es la misma paráfrasis del ensayo de Ortega que encabeza este artículo; no obstante, para Lasch la rebelión de las elites estadounidenses que controlan el dinero y la información “[...] presiden fundaciones filantrópicas e instituciones de educación superior, dirigen los instrumentos de la producción cultural y, por consiguiente, fijan los términos del debate público [...]” consiste en indiferencia y aislacionismo social. De ahí que sus debates sean por completo ajenos a la realidad social de un país que ignoran. Christopher Lasch, *The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy*, Nueva York y Londres, W. W. Norton and Company, 1995, p. 25.

² John Highley y Richard Gunther (ed.), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

³ Para una acuciosa revisión de esta literatura véase Vivianne Brachet-Marquez, “Democratic Transition and Consolidation in Latin America: Steps Toward a New Theory of Democratization”, *Current Sociology*, vol. 45, núm. 1, pp.15-53.

pues ya sea en el gobierno o en la oposición, que defendieran el *statu quo* o promovieran su desmantelamiento, en cada caso, a estos grupos minoritarios se les atribuyó un papel específico en este desarrollo.

La importancia que se atribuye a las elites parecería contradecir la idea acerca de la democratización, cuyo objetivo es *devolver el poder al pueblo*, como exigían los obreros polacos o los alemanes del Este en el año 1989. Sin embargo, la existencia y participación privilegiada de minorías en este proceso no es en sí misma antidemocrática. La formación de minorías de decisión es un desarrollo inevitable en cualquier acción colectiva organizada. Lo que define el carácter democrático de estos grupos no es el número de sus integrantes, sino su representatividad y el sentido de su participación. Serán antidemocráticos cuando se trata de grupos de privilegio, poco o nada representativos de la mayoría, que intervienen para autoperpetuarse o para reproducir una estructura de poder centralizada y jerarquizada.

El rol de las elites en los procesos de democratización ha sido examinado primordialmente en el corto plazo, a la luz de su actitud hacia el *statu quo*. A partir de este criterio se distingue entre las elites autoritarias, que buscan preservar el orden establecido, y las elites democratizadoras que buscan destruirlo y remplazarlo por un orden democrático. No obstante, si se advierten estas diferencias desde un punto de vista más general y a corto plazo, así como se incorporan factores como el origen y la composición de estos grupos, entonces se puede obtener una explicación más precisa de su comportamiento y actitudes en la crisis del autoritarismo, así como de las estrategias que utilizan.

Aquí, se propone adoptar esta perspectiva para analizar la experiencia mexicana de desmantelamiento del autoritarismo, porque desde ahí se puede identificar el origen de las dificultades con que se han enfrentado las elites políticas para concluir el nuevo pacto que demanda la construcción de un orden institucional democrático. Esta explicación aportaría también elementos para entender por qué el proceso ha sido tan lento en comparación con lo ocurrido en otros países.

La participación de las elites mexicanas en los cambios políticos de finales del siglo xx nada tendría de extraordinario. Durante la mayor parte de su historia, México ha sido un país de elites, en el que grupos minoritarios han conseguido el monopolio de recursos políticos, económicos y culturales, así como también han ejercido una influencia desproporcionada en el proceso de toma de decisiones gubernamentales, e incluso en la formación y transmisión de ideas, imágenes y valores dominantes en la sociedad. Desde el siglo xix la modernización de la sociedad, en particular, fue uno de los objetivos más claros y consistentes de estas minorías en el poder, y el Estado su

instrumento, aun cuando sus propósitos de cambio provocaran poderosas reacciones de rechazo y agudos conflictos en la sociedad misma.⁴ La preminencia de las elites ha sido el reflejo de la estructura autoritaria del poder.

No obstante, este patrón histórico parece haberse terminado al iniciarse el nuevo siglo debido a la profunda transformación de la sociedad y el Estado. A diferencia de lo que ocurría en el pasado algunos aspectos centrales del cambio social no fueron producto de su iniciativa y estaban fuera de su control; se desarrollan de manera espontánea de acuerdo con una dinámica autónoma vinculada a las dimensiones y características de una sociedad diversa y plural de más de 95 millones de habitantes; al mismo tiempo, las reformas estructurales que han reducido los instrumentos y las áreas de intervención estatales se tradujeron en la disminución de mecanismos de influencia para las elites asociadas con el Estado. En este proceso han perdido relevancia del pasado, siguen siendo actores importantes pero ahora son relativos, y para hacer valer sus proyectos tienen que competir no solamente entre sí, sino con diferentes actores internacionales —financieros, políticos e informativos— y con los efectos democratizadores del cambio social.

El objetivo de este ensayo es discutir la hipótesis de que la activación de las minorías poseedoras de recursos escasos —económicos, políticos y culturales— en México a finales del siglo xx, si bien está inspirada en una amplia movilización política antiautoritaria, es también una reacción defensiva ante la sociedad de masas que se ha hecho presente. Las acciones políticas de las minorías poseedoras tienden a recuperar el liderazgo que los cambios en la sociedad le han arrebatado y que históricamente habían ejercido.

En la primera parte de este ensayo se describen algunas de las transformaciones de la sociedad mexicana en el periodo, utilizando el concepto de *movilización social*; la segunda parte trata acerca del impacto de estos cambios en las elites; luego, se aborda el estallamiento en los años ochenta del pacto interelitista que había sustentado el autoritarismo durante más de medio siglo; y, por último se verá cómo las fracturas al interior de estos grupos fueron la base de las nuevas formaciones políticas que pusieron fin a la hegemonía del partido oficial.

⁴ Véase por ejemplo, Francois-Xavier Guerra, *México del antiguo régimen a la revolución*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. Véase también Jean Meyer, *La cristiada*, México, Siglo XXI, 1978; Leopoldo Zea, *El positivismo en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

Mobilización social y transformación de las élites mexicanas

La teoría de la modernización, tan en boga durante los años cincuenta y sesenta para el análisis del cambio social y político, ha caído en desuso debido a las severas críticas de que fue objeto, en las cuales le reprochaban simplificación, generalizaciones infundadas y conclusiones prescriptivas. Sin embargo, algunos de los conceptos que proponía pueden ayudar a sistematizar indicadores sociales que tratan de cambios profundos. Así, por ejemplo, el concepto de *mobilización social* propuesto por el politólogo estadounidense Karl Deustch puede servir para explicar las transformaciones de la sociedad mexicana que ha perdido muchos de los rasgos de una sociedad tradicional. El concepto de *mobilización social* reúne procesos que ocurren simultáneamente, están asociados y cuyo efecto combinado lleva a la introducción de amplios grupos sociales a situaciones que los obligan a abandonar sus patrones originales de comportamiento, de relación y de inserción sociales, a cambio de aceptar y apropiarse las prácticas de vida económica, tecnológica y cultural que impone el medio urbano.⁵

Los indicadores de *mobilización social* son distintos e independientes, pero están interconectados, se refuerzan mutuamente, porque van en la misma dirección, aunque a ritmo diferente. Por ejemplo, la asociación entre estos procesos es la migración del campo a la ciudad, la cual a su vez sostiene la urbanización, a consecuencia de estos procesos se produce el cambio de ocupación del sector agrícola al industrial, a los servicios, o a la economía de mercado; en el ámbito urbano grupos e individuos están más expuestos a los medios de comunicación de masas e incluso a la educación formal, y esta experiencia genera nuevas expectativas y comportamientos, al mismo tiempo que induce la necesidad de desarrollar o adoptar formas y patrones de organización e integración sociales adecuados al medio urbano: grupos de vecinos, sindicatos, clubes, grupos religiosos, de ayuda mutua, de padres de familia; así como nuevos patrones de relación con la autoridad y de participación política. Así, el concepto de *mobilización social* no es lo mismo que *modernización*, pero se refiere a algunos de sus aspectos más importantes, principalmente sus consecuencias.

Si se mira la dinámica de la sociedad mexicana a partir de los años setenta del siglo xx, se puede constatar la ocurrencia simultánea de muchos de los procesos arriba mencionados. En las últimas tres décadas la proporción de la población urbana pasó de la mitad a las dos terceras partes del

⁵ Karl Deustch, "Social Mobilization and Political Development", *American Political Science Review*, vol. LV, núm. 3, septiembre de 1961, pp. 493-514.

total; también aumentó el porcentaje de los mexicanos que trabajaban en actividades ligadas con la industria, el comercio, los servicios y la economía informal, y el número de mujeres en el mercado de trabajo. En consecuencia surgieron grandes centros urbanos y los ya existentes, como Monterrey y Guadalajara, siguieron creciendo; la migración fue uno de los procesos más dinámicos del periodo, en el año 1995 más de 19.5 millones de mexicanos residían fuera de su estado de nacimiento, en comparación con 4.4 millones que tenían esa condición en 1960. La intensificación de los movimientos de trabajadores migratorios hacia y desde los Estados Unidos ha alterado profundamente la vida de numerosas comunidades rurales y de ciudades pequeñas en el interior del país. La apertura al exterior que se produjo desde mediados de los años ochenta adquirió una dinámica muy acelerada, de tal suerte que para la mayoría de los mexicanos el mundo exterior dejó de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad.

Uno de los indicadores más poderosos del cambio social fue el descenso en la tasa de fecundidad, que en México se acelera a partir de finales de los años setenta como resultado de la planificación familiar y el aumento en los niveles educativos de las mujeres, de forma que a finales de siglo la tasa de fecundidad era de 2.5.⁶ En el año 1999 más de 65% de las mujeres unidas utilizaban algún medio de control de la natalidad; un dato que muestra una sociedad secularizada en la que la iglesia católica ejerce una influencia limitada sobre el comportamiento individual.

Los cambios fueron reforzados por otras transformaciones también de largo plazo como la regionalización económica del país, un proceso que ha colocado a la Ciudad de México en una posición de desventaja en relación con otras entidades como Baja California, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, donde se han desarrollado economías más dinámicas y vigorosas. Los medios de comunicación masiva también registraron en el período un crecimiento impresionante, en particular la radio y la televisión. Entre los años 1982 y 1995 el número de canales de televisión en el país aumentó de 148 a 490, incluyendo los canales de televisión por cable. Entre los años 1988 y 1994 el número de radiodifusoras pasó de 881 a 1 155. En esos años se calculaba que había 17 televisores por cien habitantes y tres radios por familia. Asimismo, la media de escolaridad del país pasó de cuatro años en 1976 a ocho en 1999.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios en torno a la transición política mexicana de los últimos diez años se han concentrado en la discusión de factores políticos y en el análisis de la coyuntura. Sin embargo, desde el

⁶ Todos estos datos provienen de: Francisco Alba, "La transición demográfica", *Historia ilustrada de México, siglo xx*, en prensa.

punto de vista de largo plazo todo sugiere que la movilización social fue la amplia base que sirvió de impulso a la movilización antiautoritaria que cobró forma electoral y partidista hasta derrotar la hegemonía histórica del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1988.

Una nueva sociedad de masas

La sociedad mexicana de finales del siglo xx mostraba un sorprendente dinamismo, estaba mejor informada y mejor educada que en el pasado; y liberada de las ataduras del autoritarismo político ensayaba formas autónomas de organización y participación. Por todas estas características muchos analistas y observadores han hablado del surgimiento de la sociedad civil. Aquí, sin embargo, la propuesta es retener el concepto de sociedad de masas para mantener consistencia analítica con la noción de elites, pero también porque las transformaciones de la sociedad mexicana se produjeron en un contexto que tenía mucho de tradicional, de ahí que en lugar de que se haya formado una pluralidad de instituciones e ideologías cuyo objetivo sea un equilibrio entre el Estado y la sociedad,⁷ se ha producido una atomización social y han resurgido identidades colectivas precapitalistas —como la etnia, la familia o comunidades religiosas— que son antiliberales y, en consecuencia, antagónicas a la noción de sociedad civil.⁸ En cambio, están presentes muchos de los rasgos que Ortega y Gasset identificó en las sociedades de masas en los años veinte del siglo pasado, desde la subordinación del individuo al imperio de los grandes números hasta la reiterada preferencia por las formas de la democracia directa.

La constatación de la *movilización social* mexicana de finales del siglo xx plantea muchas interrogantes, pero aquí solamente se señalan algunas. En el artículo citado al inicio de este ensayo, Deutsch señala que estos cambios pueden ocurrir sin crecimiento de la economía, tal y como lo demuestra la experiencia mexicana que desde los años ochenta registró tasas muy bajas y recurrentes crisis financieras y económicas. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que este proceso de transformación haya tenido lugar en un prolongado contexto de deterioro de la economía, del nivel de vida de amplios grupos sociales, y de agravamiento de la desigualdad, lo cual hubiera permi-

⁷ Para esta definición de *sociedad civil* véase Ernest Gellner, *Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals*, Londres, Penguin Books, 1994.

⁸ Véase Soledad Loaeza, "Los dilemas de la democracia liberal a finales del siglo xx", *Revista Internacional de Filosofía*, en prensa.

tido prever el estancamiento o cuando menos la pérdida de dinamismo de los cambios.

Por otra parte, contrariamente a la conclusión de Deutsch de que la movilización social induce la expansión de los servicios públicos y del intervencionismo estatal, así como la ampliación del aparato de gobierno, este periodo de la historia de México se distingue por la disminución de la presencia del Estado y la reducción de su participación en la economía y, en general, en muchas de las actividades de organización social que en el pasado eran entendidas como parte de su responsabilidad. La mengua del poder del Estado y de su presencia tuvo a la vez consecuencias positivas y negativas. Entre las primeras puede mencionarse la aparición o el resurgimiento de grupos autorganizados; y entre las segundas, la desintegración social ocasionada por el desvanecimiento de los antiguos referentes de articulación que no fueron automáticamente sustituidos.

Deutsch tampoco previó la importancia determinante que tendría el desarrollo tecnológico en las sociedades llamadas tradicionales, particularmente en la expansión de la radio y la televisión cuyo uso generalizado ha remplazado a la escuela como agente de socialización. El desarrollo de los medios electrónicos ha democratizado la información, y en cierta forma ha amortiguado las diferencias de clase, en la medida en que las imágenes y los mensajes que transmiten se imponen a las fronteras socioeconómicas; son una experiencia ampliamente compartida que tiene un impacto igualitarista.

En el pasado México había vivido por lo menos dos experiencias de transformación social —al menos en esas dimensiones— semejantes a la de finales de siglo, que alteraron esencialmente su fisonomía. No obstante, se distinguen de la última porque su origen pudo atribuirse a discontinuidades políticas o económicas estrechamente asociadas con la noción predominante de modernización: primero, la revolución de 1910; y, segundo, la industrialización posterior a 1940. En cambio, el impulso al tercer momento de *movilización social* es más difícil de identificar pues su origen se debió a las discontinuidades que sugerían posibles regresiones: el agotamiento del modelo de desarrollo y la caducidad del autoritarismo.

Una de las consecuencias más notables de esta movilización social fue que *popularizó*, hizo accesible a muchos la información y la transmisión de valores y patrones de comportamiento asociados con los presupuestos básicos de una sociedad de mercado. Desde este punto de vista, la *movilización social* puede ser entendida como una “democratización fundamental”⁹ de dimensio-

⁹ Para explicar el recurso a la noción de *movilización*, Deutsch se refiere al análisis sociológico de Karl Mannheim de las consecuencias de la primera guerra mundial, cuando el campe-

nes no políticas que se produjo previa a la liberalización de la vida política.¹⁰ El impacto acumulativo de experiencias y expectativas, patrones de comportamiento y necesidades asociadas con el mercado, en cuanto al comportamiento político se tradujo en mayor interés por los asuntos públicos, y en actitudes positivas frente a formas diversas de participación política, desde votar hasta ocupar edificios públicos o bloquear calles para oponerse a ciertas decisiones gubernamentales. De ahí que se multiplicaran los grupos políticamente relevantes, y se inició una etapa de *política de masas* con las características distintivas que le daba el contexto modernizado de finales de siglo.

La noción de *democratización* puede parecer inadmisibile en un contexto de deterioro del nivel de vida de grandes grupos y de agravamiento de la desigualdad. No obstante, como se ha visto, la movilización social rompió ataduras que restringían el acceso a mercados de los más diversos bienes, por ejemplo, la información y el entretenimiento. Asimismo, estos procesos de cambio disminuyen la posición de influencia de las elites que con esa liberalización pierden el privilegio que derivaban en el pasado nada más de la escasez de estos bienes o de la exclusividad que les estaba reservada. Esta pérdida de influencia aumentó en virtud de la apertura de México al exterior, pues no fue sólo comercial, sino que también expuso a la sociedad a referencias culturales y políticas que estaban fuera del control de sus elites. El cambio social alteró su composición y sus funciones.

Elites representativas y elites de privilegio

Desde finales del siglo xx era posible distinguir entre las elites que se habían formado debido al crecimiento económico del periodo anterior, representativas de los cambios que experimentó el país en estos años; y las elites que eran producto de la reproducción del privilegio en un contexto de desigualdad y autoritarismo. Esta diferencia interna ganó en complejidad a partir de la diversificación de las jerarquías de prestigio e influencia producida durante ese periodo. Así, contrariamente a lo que sugerirían los datos negativos de distribución del ingreso y de bienestar social, la concentración del ingreso no fue la base de una elite monolítica, sino que la *movilización social* parece haber estimulado la pluralización de las elites.

sino es *movilizado* y entra al ejército. Este cambio acarrea la ruptura con el mundo tradicional y el ingreso a la modernidad.

¹⁰ Para la diferencia entre liberalización y democratización aplicada al caso mexicano, véase Soledad Loaeza, "La experiencia mexicana de liberación", *Foro Internacional*.

En el origen de este proceso pueden identificarse dos poderosos fenómenos: primero, el modelo de crecimiento económico, y segundo, el debilitamiento del Estado y del autoritarismo. Uno propició el surgimiento de elites periféricas en los estados, cuya influencia fue aumentado en correlación con el deterioro económico de la Ciudad de México y los rezagos de muchas otras entidades; y el otro dio cabida al surgimiento de minorías de influencia asociadas con el surgimiento de organizaciones estratégicas distintas del propio Estado, por ejemplo, los partidos políticos, los medios de comunicación, instituciones de enseñanza superior y otras que desarrollaron la capacidad de incidir de manera significativa y regular en el proceso de decisiones políticas nacionales.¹¹

Uno de los sustentos de la homogeneidad pasada de la elite mexicana era su común asociación con el Estado posrevolucionario, que fue la base de su influencia, poder, desarrollo y reproducción. Lo distintivo de las elites de finales del siglo xx es que su relación con el Estado era indirecta, como puede ser el caso de los empresarios locales, cuando no antagonica, como ocurre con los líderes políticos también locales que impulsaron los partidos de oposición, las organizaciones no gubernamentales o los medios. La formación de estos grupos está estrechamente relacionada con la descentralización y la regionalización del país.

El surgimiento y ascenso de las elites locales

La crisis financiera y política del año 1982 a raíz de la expropiación de la banca tuvieron un impacto decisivo en la regionalización del país. A pesar de que las políticas de ajuste del periodo posterior y la irregularidad del comportamiento de la economía afectaron el nivel de vida de toda la población, su impacto no fue homogéneo, pues, como ocurre con todas las crisis económicas de grandes proporciones, la impresión de que los efectos de la devaluación, la caída de la inversión y el gasto públicos alcanzaban por igual a toda la sociedad, ocultaba una gran diversidad de experiencias.¹² La crisis y las políticas para resolverla tuvieron un impacto desigual sobre regiones,

¹¹ Para la definición de elites véase Burton, Gunther y Highley, *op. cit.*, p. 8. Véase también Wolfgang Reinhard, "Elites du pouvoir, serviteurs de l'Etat, classes dirigeantes et croissance du pouvoir de l'Etat", en Wolfgang Reinhard, *Les élites du pouvoir et la construction de l'Etat en Europe*, París, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 1-24.

¹² Claude Bataillon, "Para una geografía regional de la crisis", en Jesús Tapia Santamaría, *Las realidades regionales de la crisis*, México, El Colegio de Michoacán, 1993, pp. 779-783.

ramas de actividad, industrias y grupos sociales, así como un poderoso efecto diferenciador.

Durante los años ochenta se profundizó la brecha entre la ciudad y el campo, entre los estados ricos del norte y los más pobres del centro y sur del país, y entre todos ellos y la capital de la República. Por ejemplo, esta última sufrió con más intensidad que los estados fronterizos la caída de la inversión pública, y mientras en el Distrito Federal la demanda de mano de obra se redujo de manera significativa, en estados como Baja California, Chihuahua, Jalisco y Sonora aumentó. La industria turística y las maquiladoras se extendieron, así como la agricultura y la ganadería vinculadas al mercado estadounidense. En determinados años el encarecimiento de bienes y servicios público, así como la caída del crédito internacional perjudicó la industria estatal y privada, mientras que la agricultura tradicional y el sector informal de la economía no sufrieron daños significativos.

En términos generales, el deterioro de la capital del país y de los estados del sur contrasta con la vitalidad de ciudades y regiones cuya actividad se vio estimulada por la liberalización del comercio desde mediados de los años ochenta, por la desregulación y más en general por algunas de las reformas estructurales emprendidas por los gobiernos de Miguel De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Esta forma de regionalización trajo la formación de elites locales, que cobraron identidad como actores políticos en los primeros años de crisis, cuando articularon demandas de autonomía frente al poder federal que era, a su vez, la sede de las elites nacionales. Los medianos y pequeños, muchos de los cuales no lograron sobrevivir a la competencia que trajo la apertura comercial, se organizaron en forma independiente para defender sus intereses de decisiones de las autoridades federales que los ignoraban pese a que les afectaban directamente.¹³

Los empresarios locales fueron un núcleo de renovación de las elites políticas, que se integraron a la estructura de poder por medio de los partidos

¹³ Para la aparición de elites locales véase Arturo Alvarado y Rodolfo González V., "La situación política del norte de México", en Carlos Bazdresch, Nisso Bucay, Soledad Loeza y Nora Lustig (comp.) *México: auge, crisis y ajuste*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 373-402; Graciela Guadarrama S., "Entrepreneurs and Politics: Businessmen in Electoral Contests in Sonora and Nuevo León, July 1985", en Arturo Alvarado Mendoza (ed.), *Electoral Patterns and Perspectives in Mexico*, San Diego, Ca., University of California, San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, 1987, pp.81-110; Miguel Ángel Vázquez Ruiz, "Los grupos de poder económico en Sonora: del poder político emanado de la revolución a la acumulación agropecuaria. Límites y expectativas", en Edmundo Jacobo, Ricardo Tirado y Matilde Luna (comp.), *Empresarios de México*, México, Universidad de Guadalajara, 1989, pp.275-286; Huber Carton de Grammont, "Los empresarios agrícolas y el Estado mexicano. El caso de Sinaloa", en *ibid.*, pp. 259-274.

de oposición, en particular del Partido Acción Nacional (PAN). A estos grupos el debilitamiento del Estado les favoreció. Además, el hecho de que estas elites periféricas hayan aparecido como producto de cambios sociales recientes les confería representatividad social distinta de la que ostentaban las elites nacionales, que seguían derivando su influencia del Estado.

La experiencia de los empresarios agroexportadores de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora, ejemplifica el proceso de formación de elites locales. Durante décadas agricultores y ganaderos de estas regiones se beneficiaron del apoyo estatal: subsidios, controles salariales, proteccionismo comercial y créditos; a partir de los años setenta impulsaron la creación o el fortalecimiento de organizaciones gremiales de defensa: la Confederación de Asociaciones de Agricultores del estado de Sinaloa, CCADES, la Unión Nacional de Productores de Algodón de la República Mexicana, UNPARM, la Unión Nacional de Productores de Garbanzo, UNPEG, o la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Todas estas en los años ochenta fueron el trampolín de participación política de sus líderes, muchos de los cuales fueron los primeros en lanzar la ofensiva antiautoritaria y desafiar la hegemonía electoral del PRI. En estos estados el PAN se convirtió en el instrumento de una coalición de intereses de agroexportadores y clases medias urbanas.

Las nuevas elites no se apoyan únicamente en una posición en la estructura económica. La regionalización también ha ocurrido en ámbitos de la cultura y la información, donde el centro del país ha perdido la hegemonía del pasado. Como se vio antes, el deterioro y la inestabilidad económicas no frenaron el desarrollo de los medios de comunicación; su efecto en el proceso de descentralización ha sido determinante, principalmente si se toma en cuenta que la expansión de la radio y la televisión se produjo de manera fundamental en los estados. Por ejemplo, en los dos extremos del territorio nacional, Baja California y Quintana Roo, en 1982 había únicamente un canal de televisión; en 1995, en cambio, cada uno contaba con 24 y 27 canales respectivamente.¹⁴

La importancia de este desarrollo en lo que a elites se refiere estriba en que televisiones y radiodifusoras locales han promovido el surgimiento y la proliferación de líderes de opinión también locales. Asimismo, la vida en las ciudades de provincia y en los estados ha adquirido una nueva dimensión, como resultado de la activación política de las regiones, del debilitamiento tanto del PRI como de la presencia política del gobierno federal, cuyo peso ha

¹⁴ Vale la pena destacar que son entidades que registran amplio crecimiento demográfico. Entre 1985 y 1990 la tasa bruta de migración en Baja California fue positiva y cercana a 28% anual; en ese mismo lapso en Quintana Roo fue de 41%, mientras que el Distrito federal en ese lapso registró una pérdida de 34%. Otros estados en los que la televisión se extendió en forma notable fueron Campeche, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

disminuido en muchos de los estados. Todos estos cambios, sumados a reformas constitucionales que ampliaron la competencia y los recursos de los municipios, introdujeron la representación proporcional en este nivel de gobierno fomentaron la recuperación de la política local y la sustrajeron de la influencia distorsionadora de los acontecimientos de la capital de la República.

La *movilización social* de finales del siglo xx propició la formación de grupos de notables locales en los estados, integrados por empresarios, políticos, periodistas, presentadores de radio y televisión, que tienen un papel importante en los equilibrios políticos de estados y regiones, pero, principalmente, que también han contribuido a la pluralización ideológica y a abrir los accesos a la distribución de recursos, talentos e influencia con relativa autonomía del poder del centro del país.

Las elites de privilegio

A diferencia de las elites periféricas, más representativas del cambio reciente, las elites nacionales deben su posición a la reproducción de una relación de dependencia con el crecimiento y la expansión del Estado. En ese sentido son elites de privilegio cuya posición se apoyaba en el presupuesto de la continuidad revolucionaria. Incluyen a los funcionarios del gobierno federal, al grueso del personal político del PRI y de otros partidos identificados con la izquierda, a numerosos empresarios, y a intelectuales y universitarios comprometidos con la generación de valores dominantes en las instituciones de enseñanza y en los medios que también estaban concentrados en la capital de la República, así como del pacto nacionalista y estatista que sustentó la estabilidad política del autoritarismo.

En el periodo examinado, estas elites establecidas vieron disminuir peligrosamente sus puntos de apoyo. Por una parte, la capital de la República que era su asiento natural, perdió la supremacía económica en relación con otras regiones del país. Como se dijo antes, el Distrito Federal fue una de las entidades más afectadas por las crisis de los años ochenta, así como por las políticas de reforma del Estado. Como es natural, la disminución de su hegemonía debilitó la posición relativa de sus elites que se habían beneficiado de la estructura centralizada del poder y que habían podido ver en la autoridad del Estado la extensión de su propia capacidad de influencia.

Las reformas estructurales de los gobiernos de De la Madrid, Salinas de Gortari y Zedillo conducentes a la reducción del aparato público y de la presencia estatal en diferentes dimensiones de la vida social también fueron una amenaza para las elites de privilegio y fuente de divisiones en su interior.

Algunos grupos apoyaron las nuevas políticas de reforma económica que limitaban el intervencionismo estatal, sin embargo, otros respondieron, paradójicamente al igual que los grupos más desvalidos de la población, volviendo los ojos hacia el propio Estado en busca de apoyo, porque en él veían el medio natural de su supervivencia y reproducción, sobre todo ante el empuje de la movilización social. Esta discrepancia al interior de las elites establecidas fue el origen de la ruptura que dividió al PRI en el año 1987, pero que también contribuyó a la renovación de las elites políticas y a la pluralización ideológica al concretarse en la formación del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en 1989.

El surgimiento de las elites periféricas también fue una amenaza para las elites nacionales que hasta entonces habían monopolizado la generación y distribución de los recursos económicos, políticos y culturales escasos y desde los años ochenta tienen que enfrentar una competencia por el liderazgo político, informativo y hasta cierto punto también la hegemonía cultural. Si se miran las elites de privilegio a la luz de los cambios de la *movilización social* del último cuarto de siglo, estos grupos aparecen crecientemente aislados del resto del país. Esta condición se hizo patente en la marcada hostilidad que se manifestaba en el periodo en los estados en contra de los capitalinos que eran identificados con el centralismo, el gobierno federal que los “despojaba” de su riqueza en beneficio exclusivamente de la capital de la República y el PRI que era visto como su instrumento antes que como partido político. La multiplicación de las derrotas priistas en el ámbito local es una muestra de la erosión del prestigio de las elites de la Ciudad de México.

El estallamiento del pacto interelitista

El *pactismo* es una de las claves de la historia política mexicana del siglo xx, y fue uno de los pilares del autoritarismo porque sirvió para dos objetivos fundamentales: la exclusión de grandes grupos sociales de la negociación política, y la centralización del poder. Esta fórmula de estabilización política tiene efectos antidemocráticos de largo alcance si se extiende en el tiempo y cristaliza en arreglos institucionales de largo plazo que consagran la autonomía de decisión, que se traduce en arbitrariedad de los grupos en el poder en relación con sus gobernados.¹⁵

¹⁵ Para la diferencia entre *acuerdo* y *pacto* véase Michael Burton, Richard Gunther y John Highley, “Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes”, en Burton, Gunther y Highley, *op. cit.*, pp. 1-35.

El primero de estos pactos lo concluyeron las diferentes facciones revolucionarias en 1929 y culminó con la fundación del partido oficial, Partido Nacional Revolucionario (PNR), con el compromiso de resolver en su interior la disputa por el poder.¹⁶ En términos de la época el acuerdo fue decisivo hacia la estabilización política y la contención de la fragmentación del poder que había provocado la revolución. Sin embargo, como patrón de negociación y de control político también tuvo un importante efecto de subordinación política de amplios grupos sociales que fue periódicamente ampliado: “[...] Cuando las elites nacionales pactaron [...] pactaron en beneficio propio a expensas de las masas y también en beneficio del centro a expensas de las provincias”.¹⁷ En 1938 se fundó el Partido de la Revolución Mexicana, que fue nuevamente un pacto, pero en esta ocasión se trataba de sellar la relación tutelar entre el Estado y organizaciones de obreros y campesinos, la autonomía del gobierno, a cambio de la satisfacción de sus demandas. El PRM era más incluyente que su predecesor, sin embargo, era igualmente antidemocrático. En 1946, finalmente, se fundó el PRI, también en lo que fue un nuevo pacto, que pretendía ser todavía más incluyente que el anterior, pues no se presentaba como un *partido de los trabajadores*, sino que aspiraba al pluriclasis y a la incorporación comprensiva de una amplia muestra de la sociedad del México moderno, en particular, la organización se apoyó en los grupos urbanos asociados con la industrialización.¹⁸

El conflicto interelitista que muchos autores identifican como el catalizador de la democratización, en el caso mexicano se produjo con el estalla-

¹⁶ Este pacto dejaba fuera a los adversarios *ideológicos* de la revolución, en primer lugar a los católicos en cuanto tales, así como a las facciones revolucionarias que habían sido derrotadas en el campo de batalla; tampoco participaron en el pacto los pocos empresarios que existían en el país, ni los campesinos y obreros, que, en cambio, fueron incorporados al PRM en 1938.

¹⁷ Alan Knight, “Mexico’s Elite Settlement: Conjuncture and Consequence”, en Burton, Gunther y Highley, *op. cit.*, pp. 113-145, p. 129.

¹⁸ El artículo citado de Knight analiza la relación entre elites y cambio político en México, y señala que, a pesar de los cambios que experimentó la sociedad mexicana en más de medio siglo de hegemonía del PRI, el pacto de las elites se mantuvo casi idéntico a lo largo del tiempo. Para Knight los conflictos interelitistas de principios de los años noventa se solucionarían según el patrón histórico en el cual las discrepancias entre las elites se resolverían mediante negociaciones que conducían a ajustes y convergencias de inspiración lampedusiana: cambiar para que todo siga igual. Sin embargo, este autor no toma en cuenta el surgimiento de elites locales como tales, sino que las ve todavía como elites *extrapolíticas*, y tampoco reconoce las tensiones entre ellas y las elites nacionales, ni da importancia a la fractura priista. Al atribuir la estabilidad del México posrevolucionario al pacto de 1929 minimiza las diferencias esenciales que lo distinguen de los pactos siguientes, que cristalizaron respectivamente en el PRM y el PRI.

miento del viejo pacto de 1946 que no resistieron la presión de las elites nuevas, cuya incorporación hasta entonces había sido automática o se había considerado innecesaria. La movilización electoral antipriista de los años ochenta fue la primera expresión articulada y organizada de su insatisfacción con los arreglos existentes, uno de cuyos aspectos centrales era que los empresarios no recurrirían a la política para defender sus intereses, sino que les bastaba entablar negociaciones directas con la elite gubernamental. A partir de entonces, la heterogeneidad y la competencia interna se instalaron al interior de estos grupos, derivadas de discrepancias esenciales con temas relativos al modelo económico y a la organización política del país.

De la fractura a los clivajes partidistas

En una situación de estabilidad las relaciones entre elites tienden a ser armónicas, en la medida en que sus intereses coinciden en la generación de un consenso social amplio que sustenta una jerarquía de prestigio aceptada que se fundamenta, a su vez, en la creencia de que la acción de las elites es favorable al interés general. No obstante, esta creencia puede desaparecer con relativa facilidad en situaciones de alta inestabilidad, como resultado de actitudes o decisiones impopulares de estos grupos que modifican la percepción pública de las elites, o cuando las elites establecidas es lo único que permance de un orden social que ha sido superado por cambios de largo plazo. Estos tres fenómenos se produjeron en México a partir de la expropiación de la banca decretada por el presidente José López Portillo en septiembre del año 1982.

Esta decisión provocó el agravamiento de una severa crisis financiera e inauguró una inestabilidad económica sin precedentes que ocasionó la ruptura entre las elites políticas y económicas establecidas; por otra parte, la manera como se tomó la decisión, que fue responsabilidad de un grupo restringido de asesores personales del Presidente de la República en la que no intervinieron los funcionarios responsables de las finanzas públicas, ni mucho menos miembros del PRI, y su sorpresivo anuncio, generaron una gran desconfianza en cuanto a la capacidad de la elite política de defender o promover el interés general. Estos cuestionamientos disminuyeron la posición y la autonomía de estos grupos en un contexto general de cambio social en el que se produjeron los primeros retos a la posición de privilegio que ocupaban y que, a ojos de muchos, había perdido razón de ser.

La ruptura entre la elite política y la económica a raíz de la expropiación era previsible, simplemente porque podía ser vista como un ataque a la

propiedad privada. Sin embargo, lo que era menos predecible fueron sus consecuencias sobre la elite política. La expropiación también tomó por sorpresa a esta última, y no hay ninguna evidencia de que haya encontrado una respuesta ni entusiasta ni apoyo unánime en sus filas. Peor aún, el tipo de medidas que adoptó el gobierno de Miguel de la Madrid —quien estuvo en desacuerdo con la decisión— a partir de diciembre de ese mismo año, para enfrentar la severa crisis financiera y política, muchas de ellas destinadas a la reconciliación con el sector privado, fueron criticadas por un sector de esa misma elite que las consideraba contrarias a las tradiciones del Estado posrevolucionario. Este desacuerdo se agravó por efecto de las políticas de reforma estructural adoptadas en el periodo posterior.

A partir del año 1982 dos tipos de fracturas se dieron al interior de las elites mexicanas: una, que separaba a las elites nacionales de las locales, que vieron en la expropiación de la banca un ejemplo patente de los abusos del gobierno federal y de la centralización, pero que era también la manifestación de un clivaje entre el centro y la periferia del país. La segunda fractura se produjo al interior de la elite política cuando una corriente del PRI se rebeló tanto en contra de las políticas reformistas de los presidentes De la Madrid, Salinas y Zedillo, como en contra del desplazamiento al que parecía condenarlos las elites periféricas y el debilitamiento del Estado. En este caso el clivaje es de orden ideológico y se produjo en el centro del país, desde donde se ha seguido extendiendo hacia el resto del mismo.

Ambos clivajes dieron lugar a las dos formaciones políticas que más han contribuido a dismantelar la hegemonía electoral del PRI: el Partido Acción Nacional, que ha sido el vehículo de las elites locales para insertarse en la estructura del poder nacional; y el Partido de la Revolución Democrática, que nació del desprendimiento de la corriente tradicionalista del PRI que se oponía a los cambios asociados con las reformas económicas y políticas del periodo.

Las características del cambio político que se produjo en México a finales del siglo xx deben mucho a este proceso de renovación de elites, a la composición e intereses de estos grupos. Incluso puede pensarse que la lentitud con que ha ocurrido el proceso obedece a que sus estrategias y decisiones son en buena medida defensivas de sus posiciones en la estructura de poder y de influencia. Mientras la movilización antiautoritaria que encabezó Acción Nacional en los años ochenta se debió a la reacción en contra del populismo presidencialista que inspiró la expropiación de la banca, la reorganización de la izquierda y la formación del Partido de la Revolución Democrática fueron la respuesta a políticas tendentes a limitar el intervencionismo estatal. Como es evidente, las acciones del PRI en este periodo también

responden a una lógica defensiva que a su vez explica la lentitud, para muchos desesperante, de la así llamada transición mexicana.

Conclusiones

En el caso mexicano las decisiones y estrategias de las elites ante el cambio político muestran la existencia de dos grandes grupos claramente diferenciados, cuyas actitudes ante el autoritarismo, y su desmantelamiento, están ancladas en el sustento de su posición: uno está integrado por minorías representativas de las transformaciones sociales que experimentó el país en la segunda mitad del siglo xx; y el otro por grupos cuyo desarrollo estuvo estrechamente asociado con el Estado de la posrevolución. Sus diferencias nacen de un conflicto real que se deriva de dos fracturas profundas: la primera es de orden geográfico, político y económico, y opone al centro y la periferia del país; y la segunda es de naturaleza ideológica y contrapone a estatistas y antiestatistas. La persistencia de estos antagonismos, si no es que su profundización, ha sido el obstáculo para que las elites concluyan un consenso duradero en torno a las nuevas reglas de la competencia por el poder y más en general en relación con la consolidación de las instituciones postautoritarias, es decir, para que lleguen al tipo de acuerdos que fueron decisivos para el éxito del desmantelamiento pacífico de otros regímenes autoritarios. La posibilidad de superar los antagonismos interelitistas es hasta ahora muy reducida, dado que se fundan en discrepancias complejas e irreductibles que se sobreponen unas a otras: la fractura ideológica no es una extensión ni una proyección de la fractura geográfica, o viceversa.

El tipo de acuerdos políticos que concluyeron las elites hasta 1996 no garantizan una estabilidad sostenida, ni siquiera la consolidación de esos mismos acuerdos. Hasta ahora las negociaciones entre estos grupos se han concentrado en la elaboración de reglas y procedimientos electorales destinados a organizar la lucha por el poder. A lo mucho que han llegado es a un compromiso institucional contingente, que no es equivalente al compromiso sustantivo que es la materia de pactos de largo plazo que incorpora un consenso general y relativamente explícito en relación con temas distintos a los estrictamente electorales.

La profundidad de las diferencias entre las elites ha sido un obstáculo para la conclusión de un pacto de largo plazo, paradójicamente también lo ha sido su acuerdo implícito en cuanto a la necesidad de preservar la histórica autonomía de decisión de estos grupos en relación con el resto de la sociedad. Los últimos quince años del siglo xx fueron de equilibrios sin consenso.

No obstante, este objetivo, que hasta ahora ha sido inalcanzable, es deseable y cada día más urgente para las mismas elites que tienen que enfrentar un enemigo común: el desarrollo de una sociedad de masas que amenaza con reducir las a la irrelevancia. El tipo de arreglo al que lleguen para resolver este problema impondrá sobre el sistema político postautoritario una huella que será mucho más profunda que la de sus diferencias internas.

Recibido y revisado: agosto de 2000.

Correspondencia: El Colegio de México/Centro de Estudios Sociológicos/
Camino al Ajusco núm. 20/Pedregal de Sta. Teresa/C.P. 10740/México, D.F.,
e-mail: maloia@colmex.mx